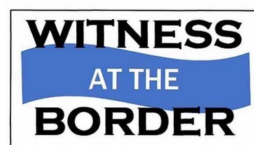
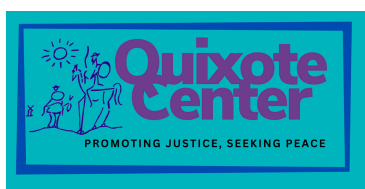


# PELIGRO EN EL DARIÉN: Violaciones de Derechos Humanos y la Urgencia de Rutas Seguras hacia la Proteccion.

---

JUNIO 2024



## INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el traicionero viaje a través de la selva del Darién, que se extiende a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en una ruta crucial para cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo de todo el mundo. Este camino peligroso ha causado graves desafíos y abusos a los derechos humanos de quienes buscan refugio y mejores oportunidades a través de las fronteras. Solamente en el 2023, más de 520.000 individuos atravesaron la selva del Darién. En mayo del 2024, más 139.000 personas han cruzado la selva del Darién, cuyas nacionalidades mayormente son de Venezuela (64%), Ecuador (7%), Haití (6%), Colombia (6%) y China (6%). Entre ellos, han cruzado 32,911 niños, cuatro de ellos nacidos en la selva del Darién de Panamá.



Estos migrantes y solicitantes de asilo arriesgan sus vidas en medio de duras condiciones y abusos generalizados por parte de facciones criminales, en particular violencia sexual, con mínima protección o ayuda humanitaria. La falta de rutas seguras y legales desde los países sudamericanos hacia México y Centroamérica obliga a los migrantes y solicitantes de asilo a desplazarse a territorios remotos y peligrosos, mientras los gobiernos regionales implementan políticas que restringen la libertad de movimiento y el acceso al asilo. Esta situación ha provocado un aumento de los cruces a través de la peligrosa selva del Darién, exponiendo a quienes cruzan la frontera a graves condiciones ambientales y abusos horribles, incluida la violencia sexual desenfrenada, y fortaleciendo el crimen organizado en la región. Los propios funcionarios del gobierno panameño, incluidos funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras (Senafrent), financiado por Estados Unidos, han cometido abusos contra migrantes y solicitantes de asilo con impunidad.

La situación resalta el fracaso de las políticas y la gobernanza nacionales en todo el hemisferio y la necesidad urgente de una respuesta basada en derechos para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo. Los gobiernos de las Américas deben adoptar políticas de inmigración que respeten los derechos humanos, reconozcan y aborden los factores de expulsión, y garanticen el acceso al territorio para la protección humanitaria. No se deben utilizar requisitos estrictos de visa y controles fronterizos militarizados para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a los países donde buscan protección. En lugar de prevenir la migración forzada, estas políticas de disuasión empujan a las personas hacia rutas peligrosas como la selva del Darién, dejándolas vulnerables a pandillas organizadas, grupos criminales y fuerzas gubernamentales corruptas. Los migrantes y solicitantes de asilo, ya sea que escapen de abusos contra los derechos humanos, desastres ambientales o la pobreza, tienen derecho a vías seguras y dignas.

Este informe fue investigado y escrito por una coalición de defensores e investigadores del Immigrant Defenders Advocacy Center, Quixote Center, Las Americas Immigrant Advocacy Center, Witness at the Border, Human Security Initiative, American Immigration Council y Red Franciscana

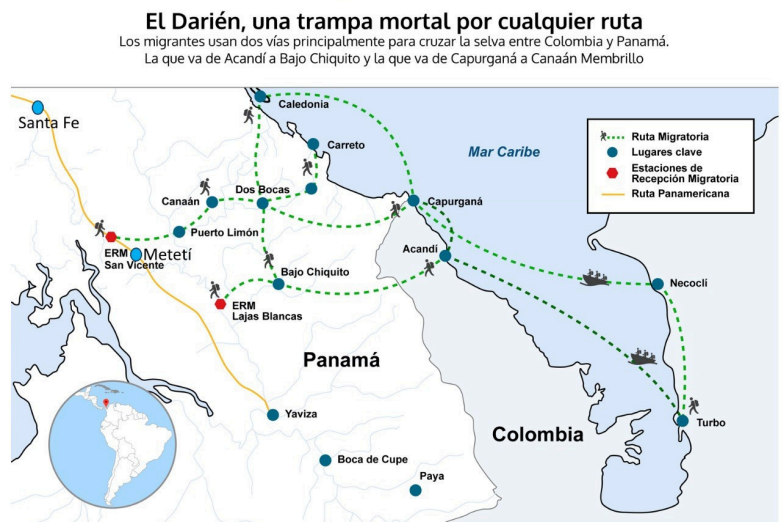
Para Migrantes, denominados colectivamente como "la coalición". En marzo de 2024, el equipo llevó a cabo una investigación sobre el terreno en Panamá, que incluyó al menos 30 entrevistas personales con migrantes, solicitantes de asilo y trabajadores de ayuda humanitaria\*. Además, el informe se basa en una revisión de datos disponibles públicamente, medios de comunicación y otra documentación sobre derechos humanos.

Este informe busca complementar y corroborar estudios exhaustivos recientes realizados por organizaciones como Médicos Sin Fronteras/Médecins Sans Frontières (MSF) y Human Rights Watch, que han documentado abusos sistémicos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Darién y el fracaso de las autoridades gubernamentales panameñas. para proporcionar una protección adecuada. A pesar de pruebas sustanciales, el gobierno panameño ha negado persistentemente estas acusaciones. Las conclusiones de la coalición, consistentes con las de otras organizaciones de derechos humanos, respaldan los llamados al gobierno panameño a tomar medidas para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, y a exigir responsabilidades por los abusos, incluso cometidos por funcionarios del gobierno panameño. Además, la coalición pide al gobierno de Estados Unidos que implemente cambios políticos significativos para abordar los abusos de derechos humanos y las crisis humanitarias que enfrentan las personas que cruzan el Tapón del Darién.

## ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LOS HALLAZGOS CLAVE

### ANTECEDENTES

Este informe busca complementar y corroborar estudios exhaustivos recientes realizados por organizaciones como Médicos Sin Fronteras/Médecins Sans Frontières (MSF) y Human Rights Watch, que han documentado abusos sistémicos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Darién y el fracaso de las autoridades gubernamentales panameñas. para proporcionar una protección adecuada. A pesar de pruebas sustanciales, el gobierno panameño ha negado persistentemente estas acusaciones. Las conclusiones de la coalición, consistentes con las de otras organizaciones de derechos humanos, respaldan los llamados al gobierno panameño a tomar medidas para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, y a exigir responsabilidades por los abusos, incluso cometidos por funcionarios del gobierno panameño. Además, la coalición pide al gobierno de Estados Unidos que implemente cambios políticos significativos para abordar los abusos de derechos humanos y las crisis humanitarias que enfrentan las personas que cruzan el Tapón del Darién.



Tales aumentos se deben en parte a las terribles condiciones en los países de origen de los inmigrantes. Entre 2005 y 2020, el número de migrantes en América Latina y el Caribe se duplicó,

\*TODAS LAS ENTREVISTAS CON MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO SE REALIZARON EN ESPAÑOL. LAS CITAS EN INGLÉS A LO LARGO DE ESTE INFORME SON TRADUCCIONES DEL ESPAÑOL ORIGINAL DE LOS MIEMBROS DE LA COALICIÓN. 2

alcanzando los 15 millones. Más de la mitad de los migrantes entrevistados por ACNUR en marzo del 2024 citaron la inseguridad, las amenazas, la intimidación y la violencia como razones para abandonar sus países. La tasa de homicidios de Ecuador ha aumentado debido a la violencia de las pandillas y el malestar político ha llevado al asesinato de figuras públicas, incluido el alcalde más joven en marzo del 2024. En Venezuela, persisten la inseguridad alimentaria generalizada, la violencia y la opresión política, con más de 15,800 arrestos por motivos políticos. desde el 2014.

Las políticas que restringen el movimiento en las Américas obligan a los migrantes y desplazados a seguir rutas más peligrosas. La mayoría de los que se enfrentan al peligroso viaje a través de la selva del Darién son de nacionalidades que no pueden conseguir visas para viajar al norte por vía aérea. En el pasado, esta ruta la utilizaban principalmente cubanos y haitianos. Sin embargo, desde enero del 2022, países como México, Costa Rica y Belice han introducido nuevos requisitos de visa para nacionales de países que han visto un aumento de llegadas a la frontera sur de Estados Unidos, incluida Venezuela. Además, Panamá, Honduras y Guatemala han impuesto requisitos de visa a los venezolanos desde el 2017. Muchas restricciones se promulgan a instancias de Estados Unidos. Como resultado de estas restricciones de visa, los venezolanos han sido consistentemente la nacionalidad más representada entre las personas que cruzan la selva del Darién en los últimos años.

El reciente presidente electo, José Raúl Mulino, se ha comprometido a cerrar la ruta migratoria de gran tráfico a través de la selva del Darién, declarando: “Panamá y nuestro Darién no son una ruta de tránsito. Es nuestra frontera”. Es probable que nuevas restricciones al movimiento en la región impulsen a los migrantes y desplazados hacia rutas aún más peligrosas y menos reguladas, controladas por redes criminales y traficantes. El prometido cambio de política hacia una aplicación más rigurosa y deportaciones a gran escala podría obligar a muchos a regresar a países donde enfrentan persecución o violencia. Sin abordar las causas que llevan a las personas a migrar en primer lugar, este enfoque corre el riesgo de aumentar la vulnerabilidad de los migrantes y solicitantes de asilo y probablemente conducirá a crisis humanitarias más graves en las fronteras de Panamá y en otros lugares.

Organizaciones de derechos humanos y grupos sin fines de lucro han pedido al gobierno panameño que haga más para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo vulnerables. En febrero de 2024, Médicos Sin Fronteras (MSF) informó de un aumento significativo de la violencia sexual contra migrantes en la selva del Darién. En sólo una semana de febrero, MSF atendió a 113 personas, incluidos nueve niños, que habían sido agredidos sexualmente por grupos armados, lo que supone un aumento significativo en comparación con el número total atendido el mes anterior. La organización informó que la brutalidad ha escalado a niveles extremos, con hombres armados deteniendo a grandes grupos de migrantes, amenazando, agrediendo y abusando sexualmente sistemáticamente de mujeres frente a sus familias. MSF pidió medidas urgentes a las autoridades panameñas para proteger a los migrantes vulnerables, enfatizando la inaceptable continuación de estas atrocidades. Poco después, las autoridades panameñas ordenaron a MSF que detuviera todas las operaciones médicas para los migrantes que llegaban a la región sur del país después de atravesar el peligroso Darién desde Colombia a Panamá. Esto presenta una situación terrible para los migrantes que emergen de la selva del Darién, entre los cuales se encuentran numerosos sobrevivientes de violencia sexual, dado que MSF ha sido una de las pocas organizaciones que brindan asistencia en el sur de Panamá.

Además, Human Rights Watch ha publicado dos informes completos basados en casi 300 entrevistas a lo largo de 10 meses en el Darién. El último informe de la organización, publicado en abril de 2024, concluye que “las fuerzas de seguridad panameñas parecen haber cometido abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en algunos casos específicos” y que “Colombia y Panamá no están protegiendo eficazmente los derechos humanos internacionales de los migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el Darién”. Los funcionarios del gobierno panameño respondieron negando estas afirmaciones y declararon en una conferencia de prensa: “Rechazamos categóricamente el informe presentado por Human Rights Watch”.

Los hallazgos de la coalición, consistentes con los de MSF y Human Rights Watch, pintan un panorama sombrío del viaje a través del Darién y Panamá, revelando un paisaje plagado de violencia, explotación y peligros ambientales. Los migrantes y solicitantes de asilo enfrentan desafíos importantes, enfrentando abusos y explotación desenfrenados en todo momento. Los cárteles y otros elementos criminales, con la probable complicidad de los funcionarios panameños del SENAFRONT (Servicio Nacional de Fronteras), son responsables de la violencia sistémica en la selva, incluidas agresiones sexuales generalizadas y robos frecuentes.

Los peligros ambientales agravan aún más la difícil situación de quienes cruzan la frontera, y muchos sufren lesiones, enfermedades e incluso la muerte debido a las peligrosas condiciones y la falta de necesidades básicas como alimentos y agua potable. Los costos exorbitantes de los guías y el transporte crean cargas financieras e infinitas oportunidades de explotación de personas desesperadas por escapar de la persecución, reunirse con sus familias y buscar una vida mejor a través de las fronteras internacionales.

Los migrantes y solicitantes de asilo que sobreviven al infernal cruce de la jungla del Darién se encuentran varados en centros de recepción gubernamentales superpoblados y con escasos recursos, donde soportan nuevos malos tratos a manos de funcionarios panameños. El miedo a las represalias es generalizado y silencia tanto a las víctimas como a los grupos internacionales de derechos humanos que se atreven a denunciar estos abusos. La represión del gobierno contra la ayuda humanitaria y la criminalización de la asistencia dejan a los migrantes con poco apoyo, orillándolos a situaciones aún más peligrosas. Este entorno opresivo perpetúa un ciclo de explotación y sufrimiento, enfatizando la urgente necesidad de reformas integrales y protecciones más sólidas para estas poblaciones vulnerables.

En junio del 2022, los gobiernos de Estados Unidos y Panamá, junto con varios otros países de las Américas, se reunieron en Los Ángeles para afirmar su "voluntad de fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones para una vida segura, ordenada, humana y migración regular y fortalecer los marcos para la protección y cooperación internacional". Estos gobiernos se comprometieron a "proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su estatus migratorio, y respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales".

Sin embargo, nuestra investigación y encuentros de primera mano con migrantes, solicitantes de asilo, y trabajadores humanitarios en Panamá revelan que el gobierno panameño no ha cumplido sus compromisos bajo esta declaración. Las condiciones en la selva del Darién siguen siendo peligrosas: los migrantes enfrentan graves peligros ambientales y abusos generalizados por parte de facciones criminales, incluida la violencia sexual, y reciben mínima protección o ayuda

humanitaria. Esta situación se contrasta marcadamente con los compromisos asumidos para garantizar una migración segura y humana.

Además, es evidente que tanto el gobierno de Panamá como el de Estados Unidos no han cumplido con su promesa de crear "condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular mediante un robusto reparto de responsabilidades en todo el hemisferio". Existe una necesidad urgente de que estos gobiernos reevalúen y refuercen sus estrategias, asegurando que sus acciones se alineen con sus compromisos declarados de proteger la seguridad, dignidad y derechos humanos de todos los migrantes y solicitantes de asilo.



## **RESULTADOS CLAVE**

### **VIOLENCIA Y ABUSO**

Los migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan con frecuencia a robos y malos tratos de gravedad, incluida violencia sexual generalizada, en la selva del Darién. Los casos de robo y agresión son rampantes, y muchos atribuyen complicidad a los funcionarios de inmigración panameños. Abundan los ejemplos desgarradores: un hombre se desplomó y murió a causa de una herida de bala frente a su familia después de haber sido emboscado por ladrones armados; una joven venezolana de 17 años fue agredida sexualmente frente a sus padres y hermanos; hombres armados robaron y agredieron repetidamente a un padre y una hija ecuatorianos, quitándoles sus pertenencias y medicamentos. Numerosas personas que fueron asaltadas en la jungla dijeron a la coalición que creen que los agentes de inmigración panameños fueron cómplices de algunos de estos ataques, señalando que los atacantes portaban las mismas armas y equipo que los oficiales y, en algunos casos, los ataques ocurrieron cerca de donde se encontraban los servicios de inmigración. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley estaban estacionados. Un solicitante de asilo colombiano relató: “Los militares nos pararon, nos pidieron nuestras identificaciones y cuando no las teníamos, nos golpearon y nos quitaron el dinero”.

### **RIESGO AMBIENTAL**

Las personas que cruzan la selva del Darién enfrentan graves peligros ambientales, incluidos ríos rápidos, enfermedades causadas por mosquitos y encuentros con serpientes venenosas. El clima frío, la lluvia y la falta de alimentos y agua potable exacerbaban los riesgos de lesiones y muerte. Los ejemplos incluyen una mujer haitiana y su hijo que luchan con problemas de salud exacerbados por las peligrosas condiciones, y un hombre ecuatoriano que sufre una ampolla que le cubre un cuarto de su pie, lo que le dificulta caminar. Numerosos inmigrantes afirmaron haber visto cadáveres a lo largo de su viaje.

### **COSTOS EXORBITANTES, EXPLOTACIÓN Y ABUSO EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN**

El viaje a través del Darién es financieramente agotador, ya que los inmigrantes pagan sumas importantes por guías y transporte. Los costos oscilan entre \$170 y \$400 incluso antes de salir de Colombia, y se incurre en gastos adicionales durante todo el viaje. Quienes no pueden pagar a

los guías o a el transporte se enfrentan a mayores riesgos de robo y agresión. Los centros de recepción gestionados por el gobierno están superpoblados y carecen de alimentación y atención médica adecuadas. Los inmigrantes a menudo se ven obligados a pagar tarifas de autobús exorbitantes para continuar su viaje, sin otras opciones viables. Los migrantes en el centro de recepción del gobierno de Lajas Blancas informaron que estaban varados debido a la imposibilidad de pagar el pasaje del autobús, y algunos de ellos esperaron más de un mes.

## **TENSIÓN Y ENFRENTAMIENTOS CON FUNCIONARIOS DE INMIGRACIÓN**

Los frecuentes enfrentamientos y la conducta abusiva de los oficiales de inmigración agravan las duras condiciones en los centros de recepción. Los migrantes y solicitantes de asilo reportan un trato irrespetuoso y sanciones por expresar su descontento. Videos enviados a la coalición muestran protestas reprimidas con fuerza por los oficiales de inmigración, incluyendo el uso de gas pimienta contra niños. El cierre del centro de recepción gubernamental de San Vicente en marzo de 2024, tras disturbios y destrucción, probablemente está relacionado con el aumento de las tensiones por el precio de los autobuses y las condiciones problemáticas dentro del refugio. Los testimonios de los testigos sugieren que la policía de inmigración agravó la situación con un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el uso de gas pimienta en la cara de un recién nacido.



## **CRIMINALIZACIÓN DE LA AYUDA Y PROMOCIÓN HUMANITARIA**

Las represiones gubernamentales contra la asistencia humanitaria han dejado a muchos migrantes sin servicios esenciales. A los ciudadanos particulares y a las organizaciones sin fines de lucro se les prohíbe brindar ayuda, lo que agrava las dificultades que enfrentan los migrantes. Los migrantes informaron haber sido negados agua y asistencia básica en medio de un calor insoportable debido a las restricciones gubernamentales.

## **HORRORES EN LA SELVA**

### **VIOLENCIA Y ABUSO**

Durante la caminata de varios días a través del Darién, los migrantes y solicitantes de asilo a menudo se enfrentan a robos y malos tratos graves, incluidos casos de agresión sexual. La violencia contra los migrantes y solicitantes de asilo en el Darién parece ser sistémica. La coalición escuchó relatos de personas que habían sido golpeadas y despojadas de todas sus pertenencias, incluidos medicamentos y alimentos para bebés. La violencia sexual se ha vuelto cada vez más brutal, y en ocasiones decenas de mujeres son agredidas sexualmente al mismo tiempo. En enero y febrero de 2024, Médicos Sin Fronteras registró 328 denuncias de violencia sexual, frente a 676 en todo el 2023. En febrero de 2024 se produjeron 113 agresiones sexuales en sólo una semana. Además, según una encuesta realizada por la red global Mixed Migration Center, el 97 por ciento de las 219 personas entrevistadas en Costa Rica entre julio y septiembre de 2022 identificaron el cruce del Darién como el segmento más peligroso de su viaje. Los migrantes y solicitantes de asilo relataron experiencias de trauma, enfermedades, muertes, robos, agresiones sexuales y otras formas de violencia física. De manera similar, las entrevistas de ACNUR con más de 1.380

personas en el Tapón del Darién entre julio de 2022 y junio de 2023 revelaron que más del 30 por ciento había sufrido violencia, robos y otros abusos en la selva, según Human Rights Watch.

Varias personas que fueron asaltadas en la jungla dijeron a la coalición que creen que los agentes de inmigración panameños fueron cómplices de algunos de estos ataques, razonando que los atacantes portaban las mismas armas y otros equipos que los oficiales y, en algunos casos, los ataques tuvieron lugar en muy cerca de donde estaban estacionados los agentes de inmigración. Un solicitante de asilo colombiano dijo a la coalición: “Los militares nos detuvieron, nos pidieron nuestras identificaciones y, cuando no las teníamos, nos golpearon y nos quitaron el dinero”.

Según las entrevistas de Human Rights Watch, el patrón típico de estos robos consiste en que los perpetradores emboscan a sus víctimas a punta de pistola, las obligan a arrodillarse o acostarse y les exigen dinero. A menudo hurgan en bolsos y mochilas y se llevan cualquier pertenencia que encuentran, incluida comida, ropa y calzado. En algunos casos, los delincuentes segregan a las víctimas por nacionalidad o género y obligan a las mujeres a quitarse la ropa. Las mujeres relataron haber sido agredidas sexualmente por estos hombres, frecuentemente con el pretexto de buscar dinero oculto, y en algunos casos hubo violación.

Las entrevistas de la coalición son consistentes con estos relatos. Múltiples migrantes y solicitantes de asilo relataron haber sido agredidos, despojados de sus teléfonos celulares, relojes, dinero u otras pertenencias. Incluyen:

- **Dos mujeres que habían sobrevivido a la violencia sexual en la selva informaron que los agresores se llevaron a otra mujer que estaba con ellas.**
- **Un hombre se desplomó y murió delante de su esposa y su hijo después de que unos ladrones armados le dispararon en el pecho,** según un solicitante de asilo que presenció el incidente. “Soportó un día caminando con la bala en el corazón. Al día siguiente murió. Fue triste, muy triste”, dijo el solicitante de asilo a la coalición.
- **Un padre y una hija ecuatorianos fueron asaltados y agredidos en múltiples ocasiones en la selva.** “Se llevaron nuestras maletas, dinero y el teléfono de mi hija. También tomaron nuestros medicamentos”, dijo el padre a la coalición.
- **Un colombiano y el grupo con el que viajaba fueron asaltados por hombres armados que los registraron al desnudo y violaron a algunas de las mujeres.**
- **Una pareja venezolana que viajaba con niños pequeños dijo que hombres armados rodearon a su grupo y les robaron todo el dinero, la comida y otras pertenencias a punta de pistola.** También dijeron que los agresores “tocaron a las mujeres en sus partes íntimas”. La familia llegó a Bajo Chiquito, el pueblo indígena ubicado al borde de la selva, sin dinero ni comida. El padre dijo a la coalición “tendremos que trabajar para poder avanzar. Venderemos todo lo que podamos en la calle”.
- **Un solicitante de asilo colombiano y su primo fueron asaltados y golpeados tres veces en la selva.** “Se llevaron nuestro dinero, nuestras joyas de oro y todo lo que teníamos. Los que resistieron fueron golpeados o amenazados”, afirmó.



- **Una joven venezolana de 17 años fue agredida sexualmente delante de sus padres y hermanos**, según un solicitante de asilo que presenció el ataque. Añadió que “otra mujer fue agredida delante de su marido y sus hijos. Este tipo de abuso ocurre a menudo y no tenemos forma de defendernos”.

Las personas que denunciaron haber sido atacadas y robadas dijeron a la coalición que los ataques tuvieron lugar en el lado de Panamá. Esto es consistente con el informe de Human Rights Watch de que la mayoría de los robos ocurren en el lado panameño de la frontera y que en el lado colombiano, el cartel del Golfo, un grupo criminal organizado que controla grandes extensiones de territorio en la región, prohíbe el abuso de los migrantes a lo largo del sendero.

Los peligros ambientales como deslizamientos de tierra, calor y humedad elevados, terrenos montañosos y ríos caudalosos han herido y matado a muchos migrantes y solicitantes de asilo que intentan cruzar el Tapón del Darién. Los entrevistados describieron numerosos peligros ambientales, incluidos ríos rápidos, enfermedades transmitidas por mosquitos y serpientes venenosas. El frío y la lluvia complican aún más el viaje, haciéndolo extremadamente difícil. La coalición observó a migrantes y solicitantes de asilo llegar a Bajo Chiquito con ropa y pertenencias empapadas. "No podíamos dormir porque nunca sabíamos si el río iba a crecer o no", dijo una mujer venezolana a la coalición. La escasez de alimentos y agua dulce aumenta el peligro, especialmente porque a muchos les han despojado de sus suministros. Varios entrevistados informaron haber enfermado por beber agua de río contaminada. **"En la selva no teníamos agua potable. Tuvimos que beber la misma agua en la que estaban los cadáveres"**, compartió una mujer haitiana con la coalición.

Condiciones ambientales peligrosas han causado o agravado lesiones a las personas que cruzan el Tapón del Darién. La coalición escuchó varios relatos sobre el terreno traicionero y observó a personas que acababan de salir de la jungla cojeando y teniendo dificultades para caminar. En Bajo Chiquito, la coalición entrevistó a numerosos migrantes y solicitantes de asilo que resultaron heridos en la selva. Incluyen:

- **Un colombiano que había salido de la selva varias horas antes con una ampolla gigante que cubría aproximadamente una cuarta parte de su pie dijo que era “muy doloroso” y difícil caminar.** Dijo que una mujer que caminaba con su grupo se rompió el tobillo y ya no podía caminar. No sabe qué pasó con la mujer y sus familiares.
- Una mujer haitiana y su hijo tuvieron dificultades para atravesar la selva debido a múltiples problemas de salud. “Caminamos durante cuatro días por la selva. No fue fácil por mi peso. Sentí que no podía continuar. El último día no pude más. Mi amigo me animó a seguir adelante y me dijo: 'Lo lograremos'... Mi hijo también está enfermo. Tiene convulsiones. Necesita muchos medicamentos y yo no puedo caminar mucho debido a mi condición”, dijo.
- **Un ecuatoriano de 53 años que había sido herido por pandilleros en su país de origen luchó por completar el viaje a través de la jungla después de que hombres armados le robaron los medicamentos que necesitaba para la hipertensión y la diabetes.**

- **Una joven que cojeaba severamente al desembarcar de un bote en Bajo Chiquito le dijo a un integrante de la coalición que la caminata por la selva agravó una lesión previa en su fémur, provocando que se quedara atrás. Luego de separarse de su grupo, la joven fue violada.**

Los migrantes y solicitantes de asilo sufren fracturas de huesos o dislocaciones de articulaciones, se ahogan o mueren durante el viaje. Las autoridades suelen tener dificultades para identificar los cadáveres y determinar las causas de las muertes por descomposición. Los informes recibidos por Human Rights Watch sugieren casos de decapitación, desmembramiento y otras brutalidades infligidas por individuos armados. El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM ha documentado al menos 300 desapariciones en el Darién entre 2021 y mayo de 2024. Es probable que se trate de recuentos insuficientes, ya que muchas muertes y desapariciones nunca se denuncian. Muchos migrantes han informado haber encontrado restos humanos a lo largo de su viaje, y algunos han visto múltiples cuerpos. El informe de ACNUR de octubre de 2023 indicó que casi la mitad de los migrantes encuestados presenciaron entre 1 y 15 cadáveres.

De hecho, la mayoría de las personas entrevistadas por la coalición informaron haber visto cadáveres mientras atravesaban la jungla o, en algunos casos muy inquietantes, haber presenciado de primera mano la muerte de personas. Por ejemplo:

- **Un bebé se resbaló de la manta de su madre, que estaba envuelta alrededor de su cuerpo, y cayó trágicamente, presuntamente muerto.** Abrumada por la desesperación, la madre se arrojó a su propia muerte, según un solicitante de asilo que presenció el incidente.
- **Un padre y una hija ecuatorianos dijeron que vieron al menos 10 cadáveres de personas que perecieron en la selva, incluida una pareja dentro de una tienda de campaña.** “Había cadáveres en el río, en tiendas de campaña, una pareja con un niño. Algunos fueron mordidos por serpientes o no pudieron continuar por agotamiento. Era una situación desesperante”, dijo el padre.
- **Un solicitante de asilo colombiano dijo que una mujer embarazada a la que ayudó murió en la selva.** “Hay muchos muertos, incluidas mujeres embarazadas. Yo personalmente ayudé a una mujer embarazada y me dijeron que había muerto. Ella quedó muerta en el lugar”, dijo.
- **Una mujer haitiana vio al menos tres cadáveres en la jungla, incluido un hombre que había muerto recientemente después de caer al río y golpearse la cabeza con una roca.** “El hombre simplemente se quedó allí. Fue terrible”, dijo.

## **COSTOS EXORBITANTES**

El paso de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién genera enormes ganancias para una amplia gama de operadores. Human Rights Watch informa que los flujos migratorios a través de la región del Darién generan decenas de millones de dólares al año y que los grupos armados controlan cada paso del Tapón del Darién. Del lado colombiano, el Cartel del Golfo realiza un seguimiento de los pagos de los migrantes y solicitantes de asilo para cruzar el Tapón del Darién proporcionándoles pulseras o pegatinas en sus pasaportes. Los migrantes y solicitantes de asilo informaron a la coalición que habían pagado aproximadamente entre 170 y 400 dólares antes de salir del puerto de Colombia. Luego son trasladados a guías indígenas panameños en la frontera.

La mayoría de las personas que cruzan el Tapón del Darién pagan por un guía (ACNUR estima que el 70% de quienes cruzaron el Darién pagaron por un guía entre julio de 2022 y enero de

2023). Las entrevistas de la coalición respaldan la observación de Human Rights Watch de que “el nivel de riesgo al que están expuestos los migrantes y solicitantes de asilo durante el viaje depende en gran medida de la ruta que pueden afrontar”. Algunas personas que pagaron por guías a través de Panamá informaron que lograron atravesar la selva sin ser asaltadas, mientras que, en general, aquellos que no pagaron por guías o pagaron menos informaron haber experimentado robos o ataques con mayor frecuencia.

ACNUR estima que el viaje a través de la selva dura aproximadamente 4 días, lo que concuerda con las entrevistas de la coalición, aunque Human Rights Watch descubrió que el viaje puede durar hasta 12 días. Human Rights Watch informó que el viaje generalmente comienza con un viaje en bote desde Necoclí, Colombia, donde los migrantes y solicitantes de asilo pagan 40 dólares (más del doble del precio que se cobra a los turistas). Aquellos con menos recursos financieros pueden apartarse.

Turbo, que es más barato. Al llegar a Comegallina, los migrantes y solicitantes de asilo reclutan a indígenas que operan pequeñas canoas de madera, conocidas como "piraguas", para transportarlas a la aldea indígena de Bajo Chiquito y posteriormente a la Estación de Recepción Migratoria (ERM) en Lajas Blancas. Esto es consistente con las entrevistas de la coalición. Los migrantes y solicitantes de asilo con los que habló la coalición en Baja Chiquito informaron haber pagado 20 dólares por el pasaje. Una joven dijo que ella y su pareja solo podían pagar el pasaje en canoa para uno, por lo que la joven llegó en canoa y estaba esperando que su pareja llegara a pie.

Al llegar a los centros de recepción panameños, los migrantes y solicitantes de asilo enfrentan cargas financieras adicionales. Según la estrategia de “flujo humanitario” de Panamá, el movimiento de migrantes y solicitantes de asilo está regulado por las autoridades panameñas, quienes facilitan su transporte a través del país hasta la frontera con Costa Rica. Human Rights Watch informa que durante su tránsito por Panamá, los migrantes deben pagar aproximadamente 140 dólares por persona, incluidos niños y bebés, por el transporte, que incluye dos viajes en bote en la provincia de Darién y un viaje en autobús a Costa Rica. Esta tarifa es onerosa para muchos inmigrantes y solicitantes de asilo, que a menudo enfrentan graves dificultades económicas.

Las entrevistas de la coalición indican que el gobierno panameño contrata autobuses privados para transportar migrantes directamente desde Lajas Blancas a Costa Rica. El viaje dura unas 12 horas. Los entrevistados informaron que el pasaje del autobús es de \$60 por persona, incluidos niños pequeños, el cual debe pagarse en efectivo a las autoridades panameñas. Los entrevistados informaron que las autoridades gubernamentales les habían advertido que serían detenidos y deportados si intentaban salir del centro de recepción a pie. Por tanto, pagar un autobús gubernamental es la única opción para salir del centro de recepción. Y hay poca ayuda o flexibilidad para quienes no pueden pagar la tarifa: varias personas que se hospedan en Lajas Blancas dijeron a la coalición que varios días antes, funcionarios panameños habían bajado a una mujer y a sus hijos de un autobús porque a la familia le faltaba un dólar del dinero. tarifa requerida. Una familia que había estado alojada en San Vicente relató una situación comparable: "Las condiciones en San Vicente eran terribles. No teníamos dinero para continuar y el autobús costaba 60 dólares por persona. No había forma de ganar dinero en el campamento; No nos permitieron trabajar", dijo el padre.

Aquellos que tienen dinero en efectivo para pagar los autobuses a menudo pueden salir hacia la frontera con Costa Rica el mismo día que llegan a Lajas Blancas. Pero las personas que llegan al centro de recepción y que no pueden pagar el pasaje del autobús esperan indefinidamente otras opciones sin saber cuándo o si podrán salir. Algunos pueden recibir pagos a través de transferencias electrónicas de Western Union, pero no hay ninguna instalación cercana para recibir dichos pagos, y los entrevistados informaron haber tenido que pagar una tarifa exorbitante del 30% a los intermediarios que viajan a la ciudad para recibir los pagos, además de los honorarios cobrados por la empresa que facilita la transferencia. Esta situación ha incrementado las tensiones entre los migrantes y las autoridades gubernamentales panameñas, que se detallan en la siguiente sección.



## RECEPCIÓN EN PANAMÁ

### CONDICIONES PROBLEMÁTICAS EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN

Migrantes y solicitantes de asilo denunciaron condiciones horribles en los centros de recepción operados por el gobierno en la región de Darién. Human Rights Watch concluyó que “las autoridades panameñas hacen pocos esfuerzos para garantizar los derechos a la alimentación, el agua y la atención médica de las personas que viven en las comunidades indígenas donde los migrantes y solicitantes de asilo emergen por primera vez del Darién, para aquellas personas que cruzan por esta región, y para quienes se encuentran en las estaciones de recepción de migrantes. El insuficiente apoyo disponible para los migrantes y solicitantes de asilo en esta región en particular proviene principalmente de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias no gubernamentales”. Los hallazgos de la coalición son consistentes con estas observaciones.

Cuando la coalición visitó la región del Darién, uno de los centros de recepción, San Vicente, había sido cerrado debido a los disturbios de la semana anterior. El cierre de San Vicente provocó hacinamiento en el otro centro de acogida de la región, Lajas Blancas. Representantes del gobierno panameño negaron a la coalición el acceso al interior de Lajas Blancas, alegando preocupaciones de seguridad. Al equipo se le permitió realizar entrevistas fuera del centro, donde cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo estaban reunidos dentro y alrededor de refugios de madera improvisados.

La coalición entrevistó a migrantes y solicitantes de asilo de Venezuela, Colombia, Ecuador y Haití. Los entrevistados informaron que en las instalaciones también había personas y familias de Siria, India, Ghana y Honduras, entre otros países. Casi todos los entrevistados en Lajas Blancas compartieron quejas similares de hacinamiento, alimentación inadecuada y atención médica insuficiente en el centro. Algunas familias tenían niños enfermos. Varias personas alojadas en el centro dijeron que no les habían proporcionado comida suficiente y el poco alimento disponible era de mala calidad. Algunos habían recurrido a cazar y comer buitres salvajes que acechan en el lugar.

La organización sin fines de lucro con sede en Panamá Red Franciscana Para Migrantes, que acompañó a la coalición, informó las siguientes observaciones generales sobre las condiciones

en las blancas,

“En general, el perfil de los migrantes en aquella época incluía a jóvenes, hombres, mujeres y muchos niños. Sus quejas se referían principalmente a la falta de dinero para continuar el viaje, la escasez de alimentos, problemas de salud (principalmente enfermedades gastrointestinales) y dificultades para obtener dinero en efectivo. Algunos migrantes se acercaron a nosotros y se quejaron del maltrato por parte de las autoridades, afirmando que la comida traída desde Panamá por los proveedores de la estación olía mal y no era comestible, provocando problemas intestinales a quienes la comían. Otra queja fue por el agua, que al consumirla provocaba diarrea”.

Muchos solicitantes de asilo y migrantes llegan a Lajas Blancas con poco o ningún dinero debido a las condiciones en sus países de origen o, en muchos casos, porque les robaron y despojaron de sus pertenencias mientras atravesaban la selva. Muchos no tienen familiares capaces de enviarles dinero mediante transferencias electrónicas. Por ejemplo, un joven colombiano le dijo a la coalición que él y su hermano no podían pagar el pasaje de autobús de 60 dólares para llegar a Costa Rica después de haber sido asaltados y golpeados en la selva.

Además, la Red Franciscana Para Migrantes informó:

“Algunas mujeres mencionaron que fueron violadas y agredidas en la selva y no tenían dinero para continuar. Se señaló que no existen servicios de transferencia de dinero como Western Union. Dijeron que los prestamistas panameños fuera de la estación de Lajas Blancas facilitaban las transferencias de dinero de sus familias pero cobraban una comisión del 30%, que les pareció muy alta. El ambiente afuera era caótico, con los inmigrantes frustrados y pidiendo apoyo para continuar”.

Aquellos que no pueden permitirse el lujo de irse pueden quedar varados en el centro de recepción durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, una mujer embarazada le dijo a la coalición que había estado varada en las instalaciones durante una semana. Otra mujer venezolana dijo que llevaba 15 días en la instalación. Algunas personas nos dijeron que han estado varados en Lajas Blancas durante ocho a 10 días. Un padre y un hijo ecuatorianos dijeron a la coalición que habían estado varados durante más de un mes.

Algunos estaban desesperados por continuar a pie el viaje hacia el norte. Sin embargo, los entrevistados informaron que la policía de inmigración les había advertido que serían detenidos y deportados si intentaban cruzar Panamá a pie. Con pocas opciones, algunos migrantes y solicitantes de asilo intentan caminar por Panamá. Una mujer venezolana dijo a la coalición, a través de un mensaje de voz, que había abandonado el campamento junto con un grupo desesperado por salir de Lajas Blancas. La coalición perdió contacto con la mujer y desconoce si el grupo logró atravesar el país con éxito.

## **TENSIÓN Y ENFRENTAMIENTOS CON FUNCIONARIOS DE INMIGRACIÓN**

Las condiciones problemáticas y las pocas opciones para quienes no tienen fondos para irse han alimentado las condiciones tensas en los centros de recepción de Darién. Los entrevistados informaron de frecuentes enfrentamientos con agentes de inmigración, que eran visibles patrullando la zona con armas grandes. Muchos denunciaron conductas abusivas por parte de agentes de inmigración en los campos. “Los guardias nos trataron muy groseramente, especialmente cuando hacíamos cola para recibir comida. Fueron muy irrespetuosos”, dijo un ecuatoriano a la coalición. Un joven colombiano también denunció malos tratos:

“Nos tratan como si no fuéramos nada... Al recibir la comida me mandaron de regreso dos veces porque dijeron que me salté la fila. Ese día, No comí. Me quejé con los funcionarios de inmigración, pero no hicieron nada... Si hablas o señalas algún maltrato, te sancionan. Tienen derecho a tratarnos como quieran, pero no podemos defendernos”.

Después de que la coalición abandonó Lajas Blancas, los migrantes y solicitantes de asilo enviaron videos a un miembro de la coalición que parecían mostrar una protesta afuera de las instalaciones. Los videos muestran escenas caóticas en las que aparecen migrantes y solicitantes de asilo que relatan quejas sobre las condiciones de alojamiento y el costo de los autobuses. Para responder con fuerza, inmovilizando físicamente a las personas y rociando con gas pimienta a un gran grupo de personas, incluidos niños. Posteriormente se informó a la coalición que aproximadamente 12 personas fueron secuestradas entre la multitud. Los testigos creen que las personas fueron atacadas porque habían estado filmando los eventos. Durante al menos 36 horas, los familiares de los detenidos dijeron a la coalición que los funcionarios no proporcionaron información sobre el paradero de sus familiares.

La hermana de un venezolano que fue llevado por funcionarios del SENAFRONT le dijo a un miembro de la coalición que dos días después de que se llevaron a su hermano, recibió una llamada telefónica de un hombre que dijo ser de la fiscalía penal. El hombre dijo que su hermano había sido acusado de daños a la propiedad después de que se rompieran las ventanillas de un autobús durante el incidente. El hermano habló brevemente durante la llamada. El hombre le dijo a la hermana que necesitaría enviar una transferencia bancaria de 125 dólares para asegurar la liberación de su hermano; y que si no enviaba el dinero, su hermano sería encarcelado durante 28 meses. La familia logró reunir el dinero y enviarlo según lo solicitado. Sin embargo, el hermano no fue liberado; fue transferido a la custodia de agentes de inmigración, quienes le dijeron a la familia que sería deportado.

Más de un mes después del incidente, el venezolano permanece bajo custodia del gobierno panameño, donde ha sufrido severas golpizas y malos tratos. La hermana del hombre le dijo a un miembro de la coalición: “Mi hermano no está bien. Hablo con él cada 15 días y ayer hablé con él... allí tratan muy mal a la gente”. El venezolano le dijo a su hermana que las otras personas que fueron sacadas de Lajas Blancas durante la protesta también estaban siendo deportadas y estaban detenidas con él.

A finales de mayo de 2024, después de pasar más de un mes en horribles condiciones de detención, el venezolano llegó a su casa con heridas graves, que, según dijo, se debían a las golpizas propiciadas por funcionarios panameños mientras estaba bajo custodia. Su hermana le dijo a un miembro de la coalición:

“Mi hermano finalmente está en casa, gracias a Dios. Los guardias que estaban dentro lo golpearon tan brutalmente que tiene heridas graves en el cuerpo. Cuando llegó estaba llorando, contando cómo los desnudaban, les ataban las manos, los colgaban y los golpeaban brutalmente en la espalda con palos y también en las piernas, que están hinchadas... A mi hermano lo golpearon muy fuerte en sus testículos que ahora tiene un bulto y creemos que no podrá tener hijos. Y en la espalda le causaron varias fracturas... Dijo que no podían decir nada porque empeoraría las cosas. No es justo el calvario que pasó, encerrado sin comunicación, y cada vez que hablaban, alguien estaba a su lado, no podían hablar abiertamente. Estaba desesperado por salir, y si los soportaba todos, no podrían hablar abiertamente. Estaba desesperado por salir, y si soportó todo eso fue porque quería volver a vernos. Pero no es justo el estado en el que llegó; estaba demasiado delgado, demasiado pálido. Ahorita le estamos dando vitaminas, inyectándole tantas cosas para ayudarlo a recuperarse porque estuvo enfermo con una tos que lo hace vomitar cada vez que tose”.

## TENSIONES Y DISTURBIOS EN SAN VICENTE

La coalición escuchó relatos contradictorios sobre los motivos del cierre de San Vicente. Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre un disturbio que resultó en la destrucción de vehículos y tiendas de campaña incendiadas. El incidente resultó en el arresto de 45 inmigrantes y solicitantes de asilo acusados de daños a la propiedad. Associated Press y otras importantes organizaciones de noticias repitieron en gran medida el relato de los hechos relatados en un comunicado del SENAFRONT (Servicio Nacional de Fronteras de Panamá), que atribuyó los disturbios y los daños a la propiedad a una disputa entre migrantes:

“Anoche, una disputa entre dos inmigrantes irregulares Se denunció una disputa entre dos mujeres sobre una carpa, en la que intervinieron las parejas de ambos migrantes, lo que desencadenó una tumultuosa pelea entre los diferentes grupos allí presentes. Esta situación fue atendida por unidades [SENAFRONT]. Sin embargo, aproximadamente otros 250 migrantes se volvieron contra las unidades del SENAFRONT, lo que provocó un mayor despliegue de nuestras unidades para salvaguardar la vida de los demás”.

Sin embargo, las conversaciones que la coalición tuvo con testigos sugieren que hay más en la historia. Un padre y una hija ecuatorianos que se habían alojado en San Vicente durante el incidente y proporcionaron detalles adicionales. El padre y la hija informaron que efectivamente se produjo un altercado entre dos mujeres por una tienda de campaña, pero que la policía de inmigración intensificó la situación lanzando gas pimienta. El hombre dijo:

“Las autoridades del SENAFRONT vinieron a separar a las mujeres que estaban discutiendo. Usaron gases lacrimógenos y alcanzaron al bebé, un recién nacido. El bebé empezó a ahogarse. Todos entraron en pánico porque el gas era muy fuerte. Todo el campamento estaba sumido en el caos. El bebé era recién nacido. Este incidente hizo que todos reaccionaran y empezaron a romper ventanas y a provocar incendios... Teníamos miedo, nos escondimos debajo de las camas y luego nos trasladamos a dormir a los baños”.

El hombre añadió que los agentes del SENAFRONT sacaron del campamento a lo que estimó entre 40 y 50 personas, “incluidos aquellos que eran inocentes”, y cree que los agentes apuntaron a personas que habían estado grabando el incidente con sus teléfonos. Estas afirmaciones reflejan las observaciones de testigos de los disturbios en Lajas Blancas, quienes dijeron a la coalición que los agentes apuntaron a personas que estaban filmando el incidente para expulsarlas. Además, los familiares ecuatorianos dijeron a la coalición que creen que los disturbios fueron motivados, en parte, por las frustraciones entre aquellos varados en el campamento que no pueden pagar los autobuses. “Creo que [el gobierno panameño] debería ser más sensible con los migrantes, proporcionar autobuses para quienes no tienen dinero y ayudarnos a seguir adelante”, dijo el padre.

## **CRIMINALIZACIÓN DE LA AYUDA Y LA INCIDENCIA HUMANITARIA**

Múltiples defensores entrevistados en el Darién y en Chiriquí informaron que la represión gubernamental contra la asistencia humanitaria a los migrantes afectaron gravemente su capacidad de permanecer operativa en el país, dejando a muchos refugiados sin acceso a servicios nacionales o internacionales protección y provisiones básicas como alimento y refugio. Un grupo local de iglesia ubicado cerca del Darién, que previamente había proporcionado servicios de alojamiento y alimentación para refugiados en tránsito, dijeron a la coalición que se vieron obligados a detener sus operaciones después de que el gobierno panameño criminalizó las operaciones de refugio no estatales para migrantes. Los proveedores de servicios panameños informaron a la coalición que también es ilegal para el sector privado proporcionar transporte a los inmigrantes. Como resultado, miles de personas se ven obligadas a atravesar terrenos inhóspitos, y la velocidad y seguridad de su tránsito dependen enteramente de su acceso al efectivo.



Algunos migrantes y solicitantes de asilo que la coalición entrevistó sabían que a los panameños se les prohibía brindar ayuda. Un colombiano le dijo a la coalición:

“Cuando llegamos en los botes, había demasiado sol y no nos dieron agua. Este camino es terrible. Es puro sol, no hay sombra, no hay agua y todo está seco. Por la falta de agua y el calor extremo, muchos mueren en el camino. El gobierno prohíbe que la gente de aquí nos ayude cuando venimos, por eso hay muchas muertes. Y si vas al pueblo y les preguntas, te dirán que tienen prohibido ayudarnos a los inmigrantes, y si ven que nos ayudan, literalmente los multarán o los meterán en la cárcel. Porque en el camino un camión que paramos para pedir agua y bajar nos dijo que aquí los soldados... eso dijeron, los soldados prohíben a la gente que pasa por esa ruta darnos agua o ayudarnos en cualquier cosa. camino, o incluso llevarnos en sus coches. ”

Un ecuatoriano expresó sentimientos similares: “Hay mucho maltrato y discriminación. Los inmigrantes sufren mucho y es difícil incluso conseguir necesidades básicas como el agua. En mi país, cuando vinieron los venezolanos, los ayudamos. Aquí es diferente”, dijo a la coalición.



Panamá no está solo en sus esfuerzos por restringir la capacidad de organizaciones e individuos para brindar ayuda a los migrantes. En todo el continente americano, los proveedores de ayuda están en el punto de mira para el detrimento de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Por ejemplo, en Estados Unidos, estados como Texas han promulgado o están considerando leyes antiinmigración que criminalizan la distribución de ayuda, equiparándola con tráfico de personas e imponiendo penalizaciones severas.



A finales de 2023, Texas aprobó dos leyes, ambas conocidas como SB4, dirigidas a refugiados y grupos de defensa. La primera SB4 (88-4), firmada en noviembre de 2023, faculta a la policía estatal y local a hacer cumplir las leyes de inmigración, detener a sospechosos de no ser ciudadanos y acusarlos de “entrada ilegal” a Texas, penado con hasta seis meses de cárcel y deportación. El reingreso puede conllevar entre 10 y 20 años de prisión. Aunque actualmente está estancada en litigios, esta ley ha inspirado legislación similar en otros estados y ha alimentado narrativas xenófobas. La segunda SB4, que entrará en vigor en marzo de 2024, aumenta las sanciones por contrabando y operación de “escondites”, dirigidas a quienes brindan refugio a personas indocumentadas. Los comentarios del Gobernador de Texas, Abbott, durante la firma del proyecto

de ley indicaron que la ley tiene como objetivo apuntar a los inmigrantes que buscan seguridad. Estas medidas, junto con una extensa militarización fronteriza, tienen como objetivo intimidar a activistas y ONGs, dañando la seguridad pública y exacerbando la vulnerabilidad de las comunidades de migrantes. Las leyes carecen de excepciones para niños, víctimas de delitos o solicitantes de asilo. Además, Texas ha tratado de aplicar estas leyes a nivel internacional, acusando a Save the Children -una importante organización humanitaria que trabaja en más de 100 países- de contrabando a pesar de la falta de pruebas. Estas acciones convierten la migración en un arma para infundir miedo y propagar narrativas falsas sobre el crimen. Esta tendencia a cerrar fronteras y hacer caso omiso de las leyes internacionales para obtener beneficios políticos se refleja en las acciones recientes de Panamá, lo que refleja un cambio más amplio en el enfoque del hemisferio hacia la migración.

## DESAFÍOS MÁS ALLÁ DEL DARIÉN

Además de la criminalización de la ayuda humanitaria, la externalización de las fronteras estatales y los acuerdos bilaterales centrados en la disuasión entre estados presentan algunos de los desafíos más graves para los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas en movimiento en las Américas. Aquellos que logran cruzar el Darién se encuentran con la frontera de Estados Unidos miles de millas antes de ver el muro fronterizo de Estados Unidos gracias al lanzamiento de CBPOne en enero de 2023, una aplicación para teléfonos celulares que utiliza tecnología automatizada para hacer cumplir la medición ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque se lanzó por primera vez como una plataforma para solicitudes comerciales de puertos de entrada virtuales, la aplicación ahora se promociona como el único medio para acceder adecuadamente al asilo en los EE. UU. La aplicación está geozonificada y diseñada para permitir el acceso a nuevos solicitantes una vez que llegan a la zona latitudinal de la Ciudad de México. Miles de personas entrevistadas en Ciudad Juárez, México, por miembros del personal del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas (que fueron coautores de este informe por separado), informaron dificultades técnicas con la aplicación, además de barreras del idioma, barreras educativas y mera aleatoriedad en la designación de citas, algunos esperando 2 semanas y otros más de seis meses.

Aunque los esfuerzos de Estados Unidos para controlar la migración hasta el sur de Panamá no son nuevos (en 2015 Estados Unidos celebró acuerdos con Panamá, Colombia y Costa Rica para restringir el movimiento de migrantes africanos, asiáticos y caribeños), los esfuerzos por monopolizar la tecnología y las estructuras de procesamiento de las fronteras panameñas están en aumento. En 2022, la cooperación entre Estados Unidos y Panamá se reforzó a través del Acuerdo Bilateral sobre Migración y Protección, integrando aún más los procesos de gestión migratoria entre Panamá y Estados Unidos mediante la adopción de políticas fronterizas al estilo estadounidense que aumentan la vigilancia fronteriza y la detención ilegal de solicitantes de asilo. El hacinamiento, la desesperación y las condiciones dañinas que presenciamos y de las que escuchamos son el resultado directo de estos esfuerzos.

## **RECOMENDACIONES DE POLÍTICA**

### **AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS:**

Si bien reconoce que se necesitan cambios significativos en las políticas de los gobiernos de Panamá, Colombia y otros para abordar los abusos de derechos humanos y las crisis humanitarias que enfrentan las personas que cruzan el Tapón del Darién, este informe se centra en recomendaciones para Estados Unidos. Sus autores, defensores y expertos radicados en Estados Unidos, enfatizan la necesidad de reformar las políticas estadounidenses que actualmente restringen el movimiento de personas en toda América Latina. Estas políticas restrictivas no brindan vías seguras y legales para las personas que huyen de la violencia, la pobreza o la persecución, creando así oportunidades para que redes de contrabando y organizaciones criminales exploten a migrantes y solicitantes de asilo para obtener ganancias monetarias y trata de personas. Las políticas, como la norma de elusión de vías legales, también han complicado las leyes de asilo y las han hecho menos accesibles, colocando barreras importantes para quienes buscan refugio en la frontera sur de Estados Unidos. La creciente militarización y los protocolos de asilo restrictivos obstaculizan a muchos que necesitan protección.

La coalición llama al gobierno de Estados Unidos a asumir un papel de liderazgo para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes y crear alternativas migratorias seguras, ordenadas y humanas. Aboga por el establecimiento de caminos viables para los migrantes que no pueden permitirse el lujo de esperar un proceso de libertad condicional o no tienen la documentación necesaria o los patrocinadores que exigen algunos programas. Aquellos migrantes con menos recursos son particularmente vulnerables, y a menudo son pasados por alto por las políticas actuales.

Dado que el número global de personas desplazadas por la fuerza y apátridas alcanzó los 110 millones a mediados de 2023, el informe enfatiza que la expansión estadounidense de vías de migración segura, opciones de reunificación familiar y disponibilidad de visas de trabajo es crucial. El número de visas disponibles para peticiones basadas en familiares no inmediatos y peticiones basadas en empleo no se ha actualizado significativamente desde 1990. Al 1 de noviembre de 2023, había poco más de 4 millones de familiares esperando en el límite de visas pendientes, sin incluir los familiares derivados que también son elegibles para inmigrar a los Estados Unidos. Había un número similar de personas esperando en los trabajos atrasados basados en el empleo. Los límites a las visas ponen a las personas en esperas poco realistas de décadas para obtener una visa de inmigrante.

- Mientras estaba en Panamá, la coalición habló con una mujer haitiana y su hijo. Ambos habían estado recibiendo atención médica después de un accidente de autobús hace un año en camino a Estados Unidos. La mujer haitiana, D., abandonó inicialmente Haití en 2010 después de que un terremoto hiciera imposible seguir viviendo allí. En ese momento, también solicitó una visa de inmigrante a través de su padre, ciudadano estadounidense. D. viajó primero a Ecuador y luego a Brasil. No pudo conseguir un trabajo debido a su estatus migratorio y ya no podía esperar a que estuviera disponible una visa para emigrar a través de la petición de su padre. Viajó al norte y enfrentó una violencia terrible mientras caminaba por la selva del Darién. De camino a Costa Rica en un autobús autorizado por el estado, sufrió un accidente que requirió varias cirugías en la espalda. Afortunadamente, su hijo sólo sufrió heridas leves. Una visa estuvo disponible después de 13 años; sin embargo, D. enfrenta retrasos burocráticos mientras transfiere su caso a Panamá.

En lugar de invertir fondos y recursos para aumentar la vigilancia fronteriza, lo que coloca a los migrantes y solicitantes de asilo en posiciones vulnerables sin abordar las causas fundamentales de la migración, Estados Unidos debería buscar crear y ampliar vías alternativas seguras para que personas y familias ingresen a Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos debería aumentar los fondos para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración para reducir las demoras en el procesamiento. El tiempo de espera para una visa familiar podría ser de varios años como mínimo. Para abordar los retrasos en los límites de visas, el gobierno debería aumentar el personal de visas y eliminar los límites generales y por país tanto para las peticiones basadas en el empleo como en las familiares. Además, para impulsar la economía de Estados Unidos, otra solución viable es ampliar las visas de trabajo temporales con un camino hacia el estatus legal después de un número determinado de años residiendo en Estados Unidos.

El presidente Biden debería aprovechar su autoridad ejecutiva para ampliar vías alternas para que los migrantes ingresen a Estados Unidos, alejándose de políticas regionales que exigen mucha aplicación de la ley. Esto incluye utilizar la autoridad de libertad condicional según la ley de inmigración de los EE. UU. de conformidad con 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A), que permite la entrada temporal de no ciudadanos por motivos humanitarios urgentes, como se demostró con éxito con los refugiados ucranianos. Además, el Programa de Libertad Condicional por Reunificación Familiar debería ampliarse más allá de su base actual de sólo invitación para incluir más nacionalidades e individuos con peticiones familiares pendientes. Deberían establecerse en más países oficinas de movilidad segura, que proporcionen información y referencias sobre inmigración. Además, aumentar el límite de refugiados y ampliar el programa Welcome Corps, que permite a los estadounidenses patrocinar refugiados, son pasos esenciales para abordar las tendencias de desplazamiento actuales y crear vías de inmigración más seguras y humanas.

## **AL GOBIERNO PANAMEÑO:**

La coalición apoya firmemente las recomendaciones de Human Rights Watch al gobierno panameño para mejorar la protección de las personas que cruzan el Tapón del Darién. Estas recomendaciones incluyen colaborar con la ONU y ONG humanitarias para crear un plan de contingencia integral que aborde las necesidades de grupos vulnerables específicos.

También sugieren nombrar un alto funcionario para coordinar la respuesta, modificando la estrategia de "flujo controlado" para respetar el derecho a solicitar asilo, y mejorar las capacidades de las instituciones que garantizan la rendición de cuentas por los abusos y proporcionan la asistencia humanitaria necesaria. Además, las recomendaciones enfatizan la necesidad de facilitar el trabajo humanitario en las comunidades indígenas y los centros de recepción de migrantes, mejorar las condiciones de vida y la atención médica en estas áreas y reformar los centros de recepción de acuerdo con las directrices de la ONU para dar cabida al gran número de migrantes y solicitantes de asilo.

La coalición también apoya los llamados de Médicos Sin Fronteras (MSF) para abordar los crecientes crímenes y la impunidad que enfrentan los migrantes en el Tapón del Darién. MSF ha condenado repetidamente la falta de protección de los migrantes, en particular de aquellos que necesitan tratamiento médico urgente por violencia sexual cuando salen del bosque. MSF insta a las autoridades panameñas a redoblar sus esfuerzos para proteger a las personas más vulnerables, especialmente a las familias, mujeres y niños en situaciones desesperadas. Es inaceptable que estas condiciones sigan persistiendo y es necesaria una acción inmediata para evitar más sufrimiento y brindar apoyo adecuado a quienes lo necesitan.

## **CONCLUSIÓN**

El Tapón del Darién se ha convertido en una ruta peligrosa para cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que huyen de las crisis en sus países de origen. A pesar de los compromisos regionales para crear condiciones migratorias seguras y humanas, la realidad en el Tapón del Darién está marcada por graves abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia, la explotación y los peligros ambientales. Las estrategias de disuasión actuales, como los estrictos requisitos de visa y las fronteras militarizadas, empujan a las personas hacia estas rutas peligrosas, dejándolas vulnerables a nuevos abusos. Las conclusiones de la coalición subrayan la violencia y explotación sistémicas que enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo, con una mínima protección o ayuda humanitaria disponible. Además, existe amplia evidencia de que funcionarios del gobierno panameño son cómplices de estos abusos.

Como mínimo, los gobiernos deberían priorizar la preservación de la vida como máxima prioridad. Panamá debería permitir que Médicos Sin Fronteras reanude sus servicios a migrantes y solicitantes de asilo. El gobierno de Estados Unidos, junto con otras autoridades regionales, tiene una responsabilidad importante a la hora de abordar los abusos contra los derechos humanos en el Tapón del Darién. En lugar de centrarse en el control fronterizo, lo que exacerba las vulnerabilidades de los migrantes, existe una necesidad urgente de políticas que proporcionen vías seguras y legales para quienes buscan refugio. Garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes y brindar ayuda humanitaria es crucial para abordar el desplazamiento y el sufrimiento actuales en el Tapón del Darién. Reformas integrales y protecciones más sólidas son esenciales para defender la dignidad y la seguridad de todos los migrantes y solicitantes de asilo.

## AGRADECIMIENTOS

Este informe fue investigado y escrito por Julia Neusner, Margaret Cargioli, Jennifer Babaie, Adriel Orozco, Heidi Cerneka, Tom Cartwright, Crystal Sandoval, Karla Barber y Kim Lamberty. Rafael Lara, Renée García y Vivi Cianca proporcionó investigación adicional. agradecemos a nuestrocolegas del Centro Quijote, Red Franciscana Pará Migrantes, Medalla Milagrosa, Red Clamor y otras organizaciones e individuos que ayudaron con nuestra investigación. Agradecemos a los solicitantes de asilo y migrantes que valientemente compartieron sus historias con la esperanza de mejorar el sistema para todos aquellos que buscan protección y refugio a través de fronteras internacionales.

